

icci
Instituto Científico
de Culturas Indígenas



ary
Amawta
Runakunapak
Yachay

**YACHAYKUNA
SABERES**

Septiembre 2018

REVISTA YACHAYKUNA

Septiembre 2018

Edición Digital

Instituto Científico de Culturas Indígenas, ICCI
Amawta Runakunapk Yachay, ARY

Dirección Editorial: Luis Macas
Edición General: Alicia Vacacela
Edición Electrónica: Marc Becker

ICCI

Instituto Científico de Culturas Indígenas

Calle Gaspar de Carvajal N26-27 y Luis Mosquera Narváz
Apartado Postal: 17-15-50 B
Telefax:(593 2) 2900 048
Quito- Ecuador

Website: <http://icci.nativeweb.org>

Con el apoyo de:



**Agència Catalana
de Cooperació
al Desenvolupament**



Contenido

¿POR QUÉ LA DEFENSA DEL TERRITORIO?.....	4
EL EDIFICIO DE LA UNASUR ENTRE EL RACISMO Y EL CONFLICTO POLÍTICO	16
ENGABAO: ENTRE EL MAR Y ÁLVARO NOBOA	20
LA HEURÍSTICA DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL NEOLIBERALISMO.....	26



¿Por qué la defensa del territorio?

En la cosmovisión maya el concepto de territorio tiene que ver en la forma de cómo se concibe la vida de todos los seres, cuando hablamos de estos seres nos referimos de todo lo que existe, incluyendo al ser humano deben guardar equilibrio con los demás elementos de la Madre Tierra, por lo que todos deben estar en el mismo nivel de existencia, en otras palabras mantener la relación horizontal donde no hay jerarquización entre los seres, no son entes individuales, sino seres colectivos, con su propia inteligencia, razón, sentimiento, pensamiento, existencia, intuición, etc., que los hacen diferentes entre sí, pero complementarios con los demás.

En la cosmovisión concebimos de forma diferente la vida de los seres, estamos conscientes de que también hay seres que son nuestros padres y madres, razón de nuestra existencia, así el Abuelo Sol y la Abuela Luna, son los seres mayores y la Madre Tierra, es nuestro hogar que nos cobija, que nos amamanta, que nos alimenta, por eso debemos cuidarla, protegerla de los depredadores, de los consumistas, de los que promueven un sistema económico capitalista expoliador que solo piensan en el presente, pero no el futuro de la existencia de los seres.

Proteger la Madre Tierra ha sido la lucha de nuestras abuelas y abuelos, así los actuales descendientes de los Mayas, Garífunas y Xinkas hemos estado defendiéndola para que no se muera en manos de aquellos que solo obtienen provechos desenfrenados basados en un desarrollo que enriquece a pequeños grupos y empobrece a millones de personas.

Los pueblos y comunidades que están en constante defensa del territorio de los voraces capitalistas, son criminalizados, son judicializados porque se oponen a que explotadores maltraten lo que hemos considerado nuestra Madre Tierra, por eso se defiende el territorio desde la cosmovisión indígena. En muchos lugares donde existen actividades industriales, monocultivos, petroleras, minería que maltratan el entorno natural, las consignas son las mismas de resistencia de los pueblos en el gran territorio del Abya Yala.

Asociación Maya Uk'ux B'e



Superar los subsidios en clave integral, no solo fiscal

Alberto Acosta
y John Cajas Guijarro

Rebelión

*“Con el tiempo, es mejor una
verdad dolorosa que una mentira útil”.*
(Thomas Mann)

En nuestra sociedad, lamentablemente, hay temas difíciles de discutir a profundidad. A *priori*, las más de las veces se adoptan posiciones sin reflexión alguna. Ese es el caso de los subsidios a los combustibles fósiles (gasolinas, diésel, gas doméstico...). Aquí, por un lado, están los economistas ortodoxos, quienes defienden casi como verdad revelada -cual teología- aquello de “transparentar los precios” para que el mercado produzca resultados satisfactorios. Por otro lado, encontramos defensores a capa y espada de “aparentes” trincheras frente a los dogmas ortodoxos, “aparentes” pues -luego de reflexionar a fondo- se nota que muchas de esas trincheras más bien son verdaderos muros de lamentación.

Así, los ortodoxos buscan eliminar o focalizar los subsidios de forma burda, sin pensar en los efectos de tales medidas dentro de la estructura económica (con interrelaciones y retroalimentaciones de una complejidad que rebasa los enfoques de equilibrio parcial y general). En cambio, hay bandos que -cual conservadores- defienden mantener los subsidios intactos, a pesar de las evidentes ineficiencias sociales causadas por políticas de subsidios improvisadas, carentes de estrategias claras, pero sostenidas por “costumbre” o “miedo”.

Para enfrentar este debate lleno de sombras y dogmas, proponemos una lectura preliminar sobre cómo superar los subsidios en clave integral y no solo fiscal. La idea es no caer ni en la teología ortodoxa ni en el conservadurismo, sino armar una estrategia en donde los subsidios sean herramientas que -al mismo tiempo- busquen eficiencia económica y justicia social.

Algunas asfixias fiscales

El escenario de crisis real -exacerbado mediáticamente- que vive el Ecuador se ha vuelto perfecto para reposicionar al mensaje neoliberal. Igualmente, el desperdicio correísta de la bonanza petrolera sirve de excusa para revivir la teología de que un menor tamaño del Estado casi por sí mismo “mejora la economía”, cuando lo crucial no es el tamaño sino la calidad del Estado y cuán democráticas son sus decisiones .

El caso es que, ya desde finales del correísmo e inicios del “morenismo” se ha ido reduciendo el tamaño del Estado contrayendo drásticamente la *inversión pública* de 13.980 a 8.648 millones de dólares entre 2014-2017. A la par de tal reducción del 38%



en la inversión pública, el estancamiento económico se ha agudizado -el PIB per cápita lleva tres años estancado en 6 mil dólares anuales por persona- y, a pesar de eso, el déficit fiscal persiste en una proporción promedio entre 2014-2017 de más de 5,5% del PIB (aunque cabe notar que el déficit existe desde 2009).

La persistencia del déficit -aun con menor inversión pública- surge al combinarse algunas tendencias asfixiantes especialmente en el período 2014-2017:

1. Caída drástica de los ingresos petroleros estatales, de 11.433 a 5.402 millones de dólares (aunque con cierta mejora dado el aumento del precio del crudo ecuatoriano de 40 a 62 dólares por barril entre junio de 2017 y junio de 2018);

2. Recaudación tributaria deprimida-estancada tanto del IVA (de 6.376 a 5.979 millones de dólares) como del impuesto a la renta (de 4.161 a 3.764 millones), y con expectativas a caer más por las remisiones y exoneraciones que el “morenismo” ofrece a los grupos empresariales en 2018;

3. Pago creciente de servicio de la deuda externa que, solo en intereses, pasó de 829 a 1.850 millones de dólares;

4. Gasto persistente en múltiples subsidios, en concreto para 2018 se presupuestó un gasto de 3.193,6 millones de dólares, de los cuales 1.707 millones se destinarían al subsidio a los combustibles, distribuidos en:

a. Diésel importado, con 899,3 millones (53%)

b. Gas licuado de petróleo (GLP) importado, con 380,3 millones (22%)

c. GLP nacional, con 87,88 millones (5%)

d. NAFTA importada, con 258,91 millones (15%)

e. Otros importados, con 80,65 millones (5%)

En el caso de los subsidios a los combustibles, se debe aclarar que el presupuesto de 2018 se hizo con un precio del barril de petróleo de 42 dólares. Sin embargo, en el transcurso del año el precio internacional ha aumentado, provocando que los subsidios a los combustibles puedan llegar hasta a 3 mil millones de dólares según fuentes oficiales.

A todas estas tendencias asfixiantes se suma el despilfarro y la corrupción, agujeros de cuantiosos recursos que no se avizora cómo recuperarlos.

Semejante situación fiscal arriesga la supervivencia política del “morenismo”. En respuesta, Moreno y los suyos han decidido arrimarse más al neoliberalismo, y proponen como “válvulas de ajuste fiscal” un menor empleo público y la focalización de los subsidios a los combustibles; a más de la -ya aplicada- disminución de la inversión pública.

Respecto al empleo público, solo anotemos que el “morenismo” ni menciona a la burocracia dorada (38.700 funcionarios que absorben más de 2.200 millones de dólares



anuales en salarios), y más bien plantea revisar 160.000 empleos públicos “irregulares” y regularizar apenas 70 mil . Así, en vez de racionalizar los salarios públicos, el gobierno de Moreno pliega por más desempleo, deteriorando aún más al mercado laboral...

Subsidios: del neoliberalismo miope a una visión integral

Sobre los subsidios a los combustibles -tema central de este texto-, primero sinteticemos el discurso de varios economistas ortodoxos. Para ellos, el subsidio es ineficiente y distorsionador pues, al ser generalizado beneficia más a estratos altos dueños de vehículos particulares, así como a industrias que ganan falsa competitividad usando energía subsidiada . Por tanto, al retirarse los subsidios no solo habría ahorro fiscal , sino que los precios se “limpiarían” de distorsiones , permitiendo al mercado asignar recursos con eficiencia (incluso “automáticamente” se regularía el flujo vehicular y las empresas buscarían mayor eficiencia energética). También, con menos distorsiones, “mejorarían” las opciones para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional y de otros multilaterales. A su vez, se propone que un mayor precio de los combustibles se compensa con menores tributos para importar vehículos (una situación que se deriva también del creciente aperturismo económico del país [1]); asimismo, la eliminación de subsidios debería acompañarse con otras medidas aperturistas como la eliminación del impuesto a la salida de divisas . A lo sumo en el transporte público, los economistas ortodoxos aceptan que intervenga el Estado con subsidios focalizados.

Semejante discurso es el corazón del argumento neoliberal, un argumento realmente plagado de problemas. Su principal falla es olvidar que los precios de los energéticos - no solo los combustibles- deben analizarse con amplitud, y no solo abordando la cuestión desde los ingresos y egresos fiscales. La energía no es un mero insumo, ni una mera mercancía, es un recurso *estratégico* (limitado y de importancia geopolítica en el caso de los combustibles fósiles) con múltiples implicaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales. Es más, el acceso a la energía debería considerarse incluso como un derecho.

Decimos todo esto pues la energía es crucial al definirse las estructuras de producción, circulación y consumo de mercancías; es fundamental para el transporte de personas; e, incluso, la energía caracteriza la estructura sociopolítica de un país. Sobre la producción, a más de brindar insumos a todos los sectores productivos, e l sector energético genera o fortalece encadenamientos productivos, pudiendo crear efectos multiplicadores y brindar empleo, aspecto olvidado por el análisis fiscalista y ortodoxo *parcial*. Sobre la circulación, la energía permite transportar mercancías, además de contribuir en muchos otros aspectos de carácter logístico. Sobre el consumo, ninguna sociedad es sostenible sin tocar los hábitos de consumo energéticos dispendiosos. Así, la energía debe tomarse como pieza clave en la organización de cualquier sociedad.

Esta visión integral tiene implicaciones concretas. Por ejemplo, al hablar de combustibles no podemos pensar solo en el ahorro fiscal que surge al eliminar sus subsidios ni en la regulación “automática” del mercado. El transporte privado crea presiones energéticas, sociales y ambientales que deben enfrentarse de forma estratégica. Es inadmisibles que las grandes urbes amplíen permanentemente su parque automotor privado, presionando incluso a los recursos del resto del país. Por ello, urge mejorar, masificar y subsidiar el transporte público, volverlo menos contaminante y



volverlo culturalmente preferido al transporte privado (más allá de sus efectos en términos de ingresos y gastos).

Otro ejemplo concreto que debe abordarse más allá de la dimensión fiscal es el manejo de las fuentes y alternativas energéticas disponibles. El Ecuador posee un alto potencial en energías renovables que no se aprovecha de forma conveniente (por ejemplo, de ocho megaproyectos hidroeléctricos impulsados por el correísmo, apenas funcionan tres). La tarea pasa, entonces, por definir ese potencial con precisión y crear planes adecuados de aprovechamiento y de reinstitucionalización (recordando que en el correísmo la institucionalidad en el sector energético quedó resquebrajada incluso por la corrupción).

Por tanto, es erróneo enfocarse en el problema fiscal cortoplacista sin retomar los análisis disponibles sobre el sector energético ecuatoriano (incluso desde enfoques alternativos) y, desde ahí y desde nuevas propuestas, armar una estrategia seria y concreta (abandonando cualquier dogmatismo estatista o mercantil). Por cierto, en dicho proceso debe participar activamente la sociedad civil, los movimientos sociales, los gremios, las universidades...

Lo antes dicho no implica olvidar que, a pesar de ser el Ecuador un exportador neto de energía [2] , para satisfacer su demanda interna se requiere importar derivados de petróleo (que merman gran parte de los excedentes de exportación petrolera y presionan al déficit en balanza comercial y de pagos). Los combustibles importados y los refinados localmente, al venderse en el país con subsidios, crean fuertes egresos como acabamos de ver en las presiones fiscales que agobian al Estado ecuatoriano. Esto se debe a que los precios y tarifas energéticas no responden a la realidad de los costos. Además, la diferencia de precios con los países limítrofes drena recursos a través del contrabando (solo en el caso del gas licuado de petróleo, posiblemente un 20% saldría del país a causa del contrabando).

En resumen, los subsidios a los combustibles -y a la energía en general- deben superarse en clave integral, no solo fiscal y peor neoliberal. Dicha clave integral requiere, entre otras cosas: una política nacional de precios como herramienta de política energética, económica y social; definir dónde los subsidios generan desproporciones entre oferta y demanda energéticas; definir dónde los subsidios generan ineficiencias y desperdicio de energía además de favorecer a estratos económicos altos (p.ej. automóviles privados, calentamiento de agua, etc.); definir dónde los subsidios deberían ampliarse (p.ej. transporte popular, pequeña y mediana producción, consumo energético en estratos bajos); aclarar que lo distorsionador no son los subsidios *per se*, sino su aplicación generalizada sin una estrategia seria; establecer metas y plazos claros para transformar la matriz energética.

Sabemos que las grandes distorsiones del sector energético por falta de planificación no se solucionan a corto plazo, menos aún si notamos que la política de subsidios a los combustibles empezó hace varias décadas y, desde entonces, se ha sostenido con múltiples -e infructuosos- intentos de superación. Pero buscar respuestas solo desde un menor déficit fiscal es un error grave. Si se focalizan los subsidios sin conocer los puntos medulares en dónde hacerlo, sin estimar cuánto del subsidio retirar, y sin una estrategia de largo plazo, el alza de precios podría repercutir gravemente en el aparato productivo, en el tejido social y hasta en la inflación (que ya de por sí vive una grave distorsión como resultado de la crisis económica); por algo la lógica popular -a veces



menospreciada por los analistas ortodoxos- intuye que, si sube el precio de los combustibles, sube el precio de todo.

Hasta podría surgir un efecto de “profecías autocumplidas”: si gran parte de la población asume que el aumento del precio de los combustibles hace crecer el precio de todas las demás mercancías, tal población puede anticiparse incrementando los precios de sus productos, generándose un proceso inflacionario incluso por un mal manejo de las expectativas. A eso se suma los posibles procesos especulativos que nacen siempre que las medidas económicas se manejan e informan de forma inadecuada...

Debe estar claro, entonces, que la política de precios de la energía es un tema muy delicado; un tema que requiere de toda una estrategia gradual y consensuada para cualquier transición, reconociendo la necesidad de *reducir el subsidio en unos puntos e incrementarlo en otros*. Así, la focalización debe hacerse sabiendo dónde y cómo actuar, y nunca adoptar una posición a la ligera, como han hecho no solo los distintos bandos ortodoxos y conservadores sino incluso el propio gobierno.

Siendo claro el llamado a construir una propuesta energética estratégica, revisemos algunas *ideas fuerza* sobre cómo enfrentar el tema de los subsidios. Dichas ideas no son propuestas terminadas, sino ideas que aspiran motivar a una construcción colectiva de puntos estratégicos mínimos que los sectores populares deberían exigir al poder.

Ideas fuerza para una propuesta energética integral Primero: diagnosticar

Lo primero que urge es diagnosticar con claridad la situación actual de los subsidios energéticos en el país, tanto combustibles, gas licuado de petróleo e incluso energía eléctrica. Además del diagnóstico, es crucial que la información se encuentre unificada y sea difundida desde los canales oficiales, pues la información disponible al momento es en extremo fragmentaria y dificulta la posibilidad de tener una visión global del sector energético.

De lo que se sabe, como ya se anotó antes, el incremento de los precios del petróleo ha generado un aumento en los egresos fiscales por el incremento del subsidio a los combustibles. Como muestra el cuadro 1, en el primer semestre de 2018 el subsidio creció 80% respecto al primer semestre de 2017, implicando un gasto de 907,1 millones de dólares.

Cuadro 1. Subsidios por comercialización de combustibles (millones de dólares)

Tipo de egreso/ingreso	Enero - Junio 2017	Enero - Junio 2018	Incremento
Nafta	146,1	302,4	107%
Diésel	208,0	425,2	104%
Gas licuado de petróleo	150,4	179,4	19%
Total	504,5	907,1	80%

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia.

A nivel de precios, se sabe que el subsidio a las gasolinas se diversifica entre las diferentes calidades disponibles en el mercado, de modo que la eliminación de subsidios



tendría efectos diferenciados : el precio del galón de gasolina súper pasaría de 2,30 a 3,07 dólares sin subsidio; el precio del galón de extra pasaría de 1,45 a 2,41 dólares; y el de extra con etanol (ecopaís) pasaría de 1,45 a 2,53 dólares [3] . Por su parte, la bombona de 15 kilogramos de gas licuado de petróleo tiene un precio oficial de 1,60 dólares, pero sin subsidio llegaría a los 12 dólares.

Es decir, dentro de las gasolinas, el grupo que recibe mayor subsidio son la extra y la extra con etanol, las cuales de hecho son las que poseen mayor demanda dentro del país (dejando de lado al diésel). Efectivamente, según información de Petroecuador [4], entre enero y junio de 2018 se demandaron 6,4 millones de barriles de extra con etanol, 5,9 millones de barriles de extra y apenas 2,3 millones de barriles de súper [5] . En términos agregados [6], el subsidio a la gasolina súper representaría en 2018 aproximadamente un gasto de 144 millones de dólares, mientras que el subsidio a las gasolinas extra y extra con etanol representaría 1.025 millones.

Respecto a la distribución por sectores de consumo, se conoce que entre 2007-2016 [7] el 46% del subsidio a los combustibles se dirigió al transporte, el 14% a la generación eléctrica, 14% al uso residencial, 13% al uso industrial, 8% a las actividades de construcción, 4% al comercio y otros servicios públicos. En términos geográficos, según la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador (CAMDDEPE) [8] , la mayoría del consumo de gasolinas para autos se concentra en las provincias de Guayas y Pichincha con 24,6% y 21,4% respectivamente. A su vez, dentro del mercado automotriz, las gasolinas extra y extra con etanol tienen la mayor participación con 48,7%, seguidas por el diésel con un peso de 42,9%.

Aunque se conoce toda esta información de manera fragmentaria, falta saber cómo se distribuyen los montos del subsidio a los combustibles dentro de la sociedad. Apenas se estima, según información del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) [9] , que el quintil de más altos ingresos usaría el 55% de los combustibles, mientras que los de bajos ingresos apenas usarían el 3%. Asimismo, desde múltiples fuentes se estima que una revisión generalizada del precio de todos los combustibles podría aumentar en 12% el precio del transporte, 5% el precio de bienes de consumo duradero y 1% el precio de la comida. Por su parte, un informe de 2010 elaborado por el Ministerio Coordinador de la Producción [10] indicaría que una revisión de los subsidios tendría mayor impacto sobre los hogares del quintil más alto de ingresos, con un efecto más leve en los sectores camaronero y silvicultura.

La necesidad de un diagnóstico es ejemplar en el caso del gas licuado de petróleo: aunque en principio el subsidio se focaliza al uso doméstico, se estima que los usos industriales, suntuarios y de transporte (sin considerar el contrabando) se benefician de alrededor de un cuarto del subsidio, pero no existe información oficial detallada al respecto. Igualmente, estimaciones gruesas señalan que si un vehículo usa combustible ecopaís en promedio obtiene un subsidio anual de casi 1.000 dólares, 677 dólares si usa combustible extra y 540 si usa súper ; sin embargo, tampoco hay estimaciones oficiales. Estos, y muchos otros datos, deben investigarse con urgencia.

De paso mencionemos que no es correcto enfocarse en la eliminación aislada del subsidio a un solo tipo de combustible, como ha propuesto el gobierno de Moreno al enfocarse exclusivamente en ahorrar 144 millones de dólares eliminando el subsidio a la gasolina súper. Tal medida podría empujar la demanda hacia la gasolina extra, la cual



tiene mayor subsidio y podría mermar los ingresos obtenidos de aumentar el precio de la gasolina súper. En definitiva, reiteremos, las respuestas deben ser integrales y no improvisadas.

Segundo: priorizar el transporte público y de mercancías

Se sabe que en el Ecuador circulan 2 millones de vehículos, de los cuales 1,7 millones usan gasolina (súper, extra o extra con etanol); de los vehículos que usan gasolina, 67.699 son de alquiler (taxis, camionetas, etc.) y el resto son autos particulares. Por tanto, si se planea eliminar el subsidio a las gasolinas, debe hacerse afectando primordialmente al transporte particular, mientras que el transporte público de personas y al transporte de carga debería subsidiarse. Una opción es mantener el subsidio al diésel y prohibir totalmente el uso de vehículo particulares que usen ese combustible, dando paso a una transición del uso de gasolina al diésel por parte de buses y camiones.

Incluso se debería estudiar cuán factible es que las tarifas de transporte público sean gratuitas o más bajas que las actuales, al menos en los grandes sistemas de transporte dentro de las ciudades (y que sea nuevamente el gobierno central -y no los gobiernos seccionales- el que maneje dicho subsidio con los ingresos obtenidos de focalizar los subsidios a los combustibles). También se debe pensar en políticas que masifiquen el uso de un transporte público (p.ej. ampliar servicios de recorridos en colegios e instituciones públicas, prohibir la circulación de vehículos que solo tengan un pasajero al menos en las principales avenidas), incluso tomando como inspiración los ejemplos aplicados en otros rincones del mundo donde se aplican tarifas o directamente se prohíbe el ingreso de vehículos en zonas de alta congestión. En dicho proceso se requiere repensar al transporte público para otorgarle mayor calidad y dignidad (enfrentando problemas como el hacinamiento, la inseguridad y el acoso).

Igualmente se debe estudiar cuán viable es usar la energía eléctrica como alternativa para el transporte masivo de carga y de pasajeros; hay experiencias como el trolebús o incluso con el proyecto del metro en Quito.

Por cierto, debemos ser claros que la solución no es solo sustituir autos que consumen combustibles fósiles por vehículos eléctricos. En las ciudades más grandes el problema del transporte es cada vez más complejo por la cantidad creciente de automóviles privados. Por ello, hay que normar y hasta limitar esa expansión para mejorar sustantivamente al transporte público, que debe masificarse al tiempo que mejora su calidad. Aquí hay que incorporar a todos los sistemas de taxi, que también deben ser subsidiados.

De paso esta reflexión saca a flote otra cuestión estructural que, tarde o temprano, tendrá que discutirse en el país: la necesidad de rediseñar y redimensionar las grandes ciudades. En términos de rediseño, es urgente que las grandes urbes se diseñen dando mayor prioridad al transporte público, al uso de bicicletas y al peatón en vez de insistir en el “culto” al automóvil privado. En términos de redimensión, las grandes ciudades deben planificar con seriedad los límites de su expansión, pues simplemente es imposible sostener para siempre el crecimiento del parque automotor (e incluso el crecimiento poblacional).

Tercero: enfrentar la cuestión del gas de uso doméstico



Dentro de la estrategia energética que proponemos, antes que eliminar el subsidio al gas de uso doméstico se podría evitar su uso en otros fines cambiando la mezcla energética para reducir su capacidad calórica. Además, por ejemplo, se podría vender el gas doméstico subsidiado en tanques de máximo 5 kilos. Para garantizar la focalización del subsidio, solo la empresa estatal envasaría los cilindros y éstos se venderían en barrios populares o en poblados solo con la participación institucionalizada de comunidades y organizaciones sociales. Los respectivos municipios entregarían en comodato los terrenos necesarios. Con esta combinación de mercado y organización popular, además de ayudar a eliminar las distorsiones de un subsidio indiscriminado, se evitarían impactos -hasta culturales- demasiado altos, como sucedió con el fracasado programa de cocinas eléctricas a inducción.

Esta propuesta semi-gradualista es más potente que la simple entrega de exiguos ingresos monetarios a los más pobres. No se puede simplemente eliminar el subsidio al gas e incrementar el bono de desarrollo humano pues las urgencias de los estratos pobres pueden llevar a que éstos gasten el incremento del bono en mercancías diferentes, poniendo en riesgo sus posibilidades de adquirir el gas. A su vez, la eliminación de golpe del subsidio al gas puede llevar a que varias familias regresen a cocinar con leña, lo cual a más de generar deforestación y generar problemas de salud (especialmente en ojos y pulmones), puede exacerbar problemas de género pues muchas veces terminan siendo las mujeres quienes recolectan la leña para la cocina.

También, la propuesta de que sean las comunidades quienes se hagan cargo de la distribución del gas cuestiona la estructura oligopólica que existe en dicha actividad (donde apenas dos empresas privadas -Duragas y Agip- controlan alrededor del 70% del mercado).

Cuarto: enfatizar en sector eléctrico y en transformación de la matriz energética

Para el subsector eléctrico podría estudiarse un enfoque combinado. Por un lado, se podría interrelacionar las tarifas con los precios de los derivados del petróleo y, por otro, aplicar tarifas diferenciadas con valores más bajos en el campo y en las ciudades pequeñas y medianas, por ejemplo, en las de menos de 50 mil habitantes (similar tratamiento podría darse a las tarifas telefónicas). En los sectores populares, incluso cabría ampliar la entrega de electricidad subsidiada (sobre todo en la costa ecuatoriana por el uso masivo de ventiladores, por ejemplo), subvencionada por una tarifa más alta para quienes más consumen, enfatizando en el uso de subsidios cruzados. Con tales políticas, más que buscar una mayor recaudación de ingresos fiscales, se buscaría usar los subsidios como herramientas para mejorar la calidad de vida en el mundo rural.

Pero quizá lo más potente del subsector eléctrico es su papel crucial en la transformación de la matriz energética dentro del aparato productivo. Los subsidios a los combustibles fósiles deberían manejarse como parte de una política que incentive la transición hacia el uso de energía eléctrica y otras fuentes alternativas. Aquí también cabría un enfoque combinado, en donde mientras que a la pequeña y mediana producción se le da incentivos para aplicar una sustitución inter-energética de combustible fósil a electricidad (por ejemplo, programas gratuitos o créditos para el cambio energético), a la gran producción se la penalice por no realizar la transición.



Dicho sea de paso, aquí cabría exigir la elaboración de un programa de desarrollo hidroeléctrico descentralizado, en donde se deje de enfatizar en las grandes obras y se impulse a obras pequeñas y medianas, incluso con administración local. El objetivo es alcanzar la autosuficiencia y soberanía energéticas. Igualmente, deberá organizarse un uso racional y eficiente de la energía y una regulación de las emisiones de carbono, desde la legislación y con programas concretos como, por ejemplo, la inspección periódica de edificios.

En definitiva, requerimos un proceso plural de transición en donde caiga sistemáticamente el aporte de los combustibles fósiles aprovechando las reservas de energías renovables: hídrica, solar, geotermia, eólica. Pero hasta alcanzar tal transición, se podría instrumentar medidas urgentes como la reconversión temporal de centrales térmicas en centrales de fueloil y de gas natural. Esto evitaría la exportación del fueloil excedentario a precios baratos, y la generación -menos contaminante- de energía a partir del gas natural.

Pensando estratégicamente en otros subsidios

Si vamos a abordar la cuestión de los subsidios de forma integral, demos un paso más.

Por ejemplo se podría revisar el bono de desarrollo humano, transformándolo también en una herramienta productiva. Puede servir para promover a campesinos y pescadores, así como a pequeñas asociaciones de productores que constituyan un capital de base para generar ingresos, y cuyo destino esté ligado a procesos productivos comunitarios. Por ejemplo, los beneficiarios del bono podrían proveerse en mercados o tiendas articuladas a la producción campesina y a la pesca artesanal. De esta manera el Bono podría hasta aumentarse siempre y cuando los beneficiarios demanden productos de los campesinos, de la pesca artesanal o de los artesanos. Además, si los beneficiarios del bono en una comunidad se unen para impulsar un proyecto comunitario productivo, el Bono también podría duplicarse. El objetivo es potenciar la economía comunitaria, en el marco del Buen Vivir.

Los resultados de esta decisión son evidentes: fortalecimiento del aparato productivo campesino y pesquero artesanal, así como mayor generación de empleo y la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente. Esto se completaría con un sistema de abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos más poderosos, que usufructúan incluso de prácticas monopólicas. Esta política, que deberá recaer en el ámbito de los gobiernos municipales, con apoyo del gobierno central, provocará una dinamización de la economía local. La definición de la dieta alimenticia recaerá en los propios padres y madres de familia, que mejor conocen las oportunidades alimenticias de su localidad y no en los burócratas del gobierno central.

¿Y para cuándo eliminar los subsidios al gran capital?

En la economía ecuatoriana existen subsidios escondidos o, mejor dicho, “perversos”, pues subvencionan directa o indirectamente a los grandes grupos económicos locales y transnacionales. Aquí se encuentran, entre muchos otros ejemplos:



- Subsidios del Estado al financiamiento de la remediación ambiental cuando las empresas no asumen esa obligación,
- Construcción de infraestructura de transporte y energética para ampliar la megaminería,
- Tarifas preferenciales por el consumo de electricidad o el uso hasta gratuito del agua en actividades extractivistas,
- Apoyo para importar agroquímicos sin aranceles,
- Diversos tipos de exoneraciones tributarias y arancelarias, por ejemplo, a las mineras, etc.

A todo este conjunto cabe agregar las remisiones de impuestos o de diversas deudas con el Estado que propone el “morenismo” en su “Ley de Fomento Productivo”: con dicha propuesta, el “morenismo” otorgaría a los grupos empresariales grandes beneficios, que en 2018 legarían a 1.344,7 millones de dólares en el caso de los 50 mayores deudores del Servicio de Rentas Internas ; monto que supera el subsidio por la comercialización de derivados de petróleo registrado en 2017 (el cual sumó 1.122 millones de dólares)...

La eliminación de estos subsidios “perversos” pasa por transparentarlos. En el Ecuador, sobre todo los grandes grupos económicos, han vivido permanentemente protegidos por complejos sistemas de apoyo estatal (como parte de todo un impulso a la acumulación de grandes grupos económicos promovida desde el mismo correísmo y continuada por el “morenismo”). Es necesario pues conocer tales protecciones para evitar distorsiones que afectan a la economía y a la sociedad. Igualmente hay que visibilizar a los subsidios “legítimos” que busquen romper con las enormes inequidades de nuestra sociedad. La eficiencia o no de los subsidios dependerá de una estrategia que tenga en mente una transición pensada y ejecutada de forma adecuada, consensuada y democrática.

Si ha llegado la hora -por fin- de cuestionar los subsidios, pues cuestionémoslos todos, tanto aquellos que son ineficientes, como aquellos que pueden generar alternativas de transformación, como aquellos que son muy eficientes... para el gran capital.

Notas:

[1] No olvidar, por cierto, que ese aperturismo fue inaugurado en el correísmo con la firma del tratado comercial con la Unión Europea y continuado en el “morenismo” con la firma de un tratado con la EFTA , sus aspiraciones de un tratado con los Estados Unidos y la potencial adhesión a la Alianza para el Pacífico .

[2] Tengamos presente que los países exportadores de petróleo son los que mayores niveles de subsidio a los combustibles registran. Este “desorden fiscal” es, sin duda, una manifestación de “la maldición de la abundancia”, que constituye incluso un riesgo para la democracia.

[3] Información tomada del artículo de *El Universo*: “Estado ecuatoriano asume entre \$0,72 y \$0,99 por galón de gasolinas”, agosto 6 de 2018.

[4] Información de Petroecuador difundida en el artículo de *El Comercio*: “Ecopaís es la gasolina con más demanda”, agosto 6 de 2018.



[5] Cabe recordar que la gasolina súper tiene “mejor calidad” con 92 octanos, la extra es de menor calidad con 87 octanos y la ecopaís mezcla 95% de extra y 5% de bioetanol (proveniente de la caña de azúcar).

[6] Información tomada del artículo de *El Comercio*: “El subsidio a la súper le cuesta al Fisco USD 144 millones anuales”, agosto 7 de 2018.

[7] Información recopilada por la nota técnica del Banco Interamericano de Desarrollo: “El impacto macroeconómico de la reforma energética ecuatoriana”, julio de 2018, p.13.

[8] Información difundida en el artículo de *Expreso*: “Guayas, la más afectada si se retiran subsidios”, agosto 10 de 2018.

[9] Información difundida en entrevista de *El Comercio* a Ana Patricia Muñoz: “La revisión de subsidios es una medida aislada”, agosto 12 de 2018.

[10] Información difundida por el artículo de *El Universo* ya citado (ver nota 4).

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

John Cajas Guijaro: Economista ecuatoriano. Profesor de la Escuela Politécnica Nacional y de la Universidad Central del Ecuador.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



EL EDIFICIO DE LA UNASUR ENTRE EL RACISMO Y EL CONFLICTO POLÍTICO

Floresmilo Simbaña*

Los comentarios y ataques dirigidos contra el movimiento indígena, concretamente la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, de entregar la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a la “Universidad indígena” ponen en evidencia el nivel de violencia política latente que los sectores de poder mantienen contra todo espacio social y político de los sectores populares.

Lenín Moreno, inmediatamente después de ser juramentado como presidente lanza la iniciativa de “diálogo nacional” como mecanismo para diferenciarse de su antecesor y mentor Rafael Correa, con el objetivo de crear consensos, evitando la confrontación, y abrirse un espacio político propio. Conforme fueron avanzando los diálogos, rápidamente fue evidenciándose desde donde quería construir ese espacio propio, pues con los sectores que primero se sentó a dialogar y creó comisiones gubernamentales multisectoriales con este propósito fue con los empresarios y los viejos partidos de derecha. Las organizaciones de los sectores populares tenían que hacer fila y esperar.

Las organizaciones populares aceptaron ir al diálogo. Esta actitud tal vez resulte difícil de entender si no se tiene en cuenta que salieron del periodo correísta bastante debilitadas, ya que todas recibieron duros golpes durante los diez años el régimen liderado por Correa, quien implementó una campaña sistemática de desacreditación a través de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, se judicializó a los dirigentes de base en los conflictos mineros y petroleros, se atacó la institucionalidad organizativa mediante el retiro de sedes, anulación de personerías jurídicas, amedrentamiento y cooptación de las organizaciones a cambio de “obra pública”, etc.

En esta precaria situación tenían poco espacio para la acción política, se movían y siguen moviéndose en un callejón que se estrechaba cada vez más. En esto no hay que dejar de lado los errores propios cometidos por las organizaciones, como la ambigüedad política de sus últimas posiciones. Consientes, en alguna medida, de esta situación, ven en la promesa de diálogo una posibilidad de “respiro” necesario que pueda permitir ciertos niveles de reagrupamiento organizativo y político. Es así que la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno nacional inician el 4 de julio del 2017 un largo proceso de diálogo en busca de salidas a los muchos conflictos abiertos en el periodo del gobierno de Rafael Correa.

La Conaie luego de algunas consultas a sus organizaciones de base, elabora una propuesta para los diálogos, el documento es conocido como el *“Mandato urgente para*



la implementación y construcción del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural”, en él fijan sus objetivos.

En el “Mandato Urgente”, la Conaie plantea cuatro objetivos nacionales para los diálogos: sentar las bases para una real construcción del Estado Plurinacional; abandono progresivo del extractivismo y el impulso de una economía basada en la soberanía alimentaria y la pequeña y mediana producción; cumplimiento y respeto de los derechos humanos, cese de la criminalización de la lucha social, fortalecimiento de los mecanismos de democracia activa de la sociedad; y, combate a la corrupción.

Ante esta propuesta concreta de la organización indígena, el gobierno no presenta más que la promesa abstracta y ambigua de “diálogo y fin de la confrontación”. Más allá del discurso oficial del presidente, en la práctica los ministros, viceministros y demás funcionarios del gobierno en las mesas de diálogo ofrecían pocos espacios de apertura; era evidente el poco interés de tratar los temas de interés estructural y nacional. Esto llevó a la Conaie a poner en duda la continuidad del diálogo; sin embargo, las asambleas de la organización decidieron mantener el proceso y ejercer presión mediante movilizaciones, demandando poner los temas nacionales como prioridad.

Pasaron los meses e infinidad de mesas de trabajo, pero el gobierno siguió mostrando poca apertura política real. De tal suerte que el diálogo se fue concentrando en uno de los puntos planteados por la Conaie: la educación intercultural bilingüe y la reapertura de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, ambas cerradas por el gobierno de Correa.

Finalmente, estos dos temas se concretan mediante la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la promulgación del Decreto Ejecutivo 445 respectivamente. Este último fue firmado en la ciudad de Latacunga, en medio de un acto masivo para el que la Conaie convocó a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades, al que también asistieron muchas organizaciones sociales. Aquí es donde el presidente Moreno anuncia que el edificio de la Unasur será entregado a la “Universidad Indígena”, desatándose la histeria de los políticos y la prensa afines a los sectores de poder.

Más allá de los discursos, insultos e indignación de los “ofendidos” con el anuncio presidencial, se debe tener presente por lo menos los siguientes aspectos:

1. Si bien el caso del edificio de la Unasur desnudó el racismo de muchos, especialmente de los grupos de poder, los criterios tras el anuncio unilateral del presidente Moreno resultan hasta anecdótico, por decir lo menos, pues se está discutiendo sobre falsos: la Universidad es Intercultural, no indígena, en razón de su propuesta y de su visión epistemológica, pedagógica y administrativa. Calificarla de “Universidad Indígena” solo devela el desconocimiento, el prejuicio, pero sobre todo la intencionalidad política de deslegitimar al movimiento indígena sostenida por los sectores políticos conservadores. Entregar el edificio a la Universidad no es, en principio, una demanda de la Conaie, fue una declaración unilateral del presidente Moreno; en todo caso, ante la propuesta hecha de deberá evaluar si un edificio de esas condiciones está acorde con el modelo pedagógico y administrativo propuesto por la Universidad Intercultural Amawtay Wasi y, sobre todo, la posición deberá surgir de una decisión colectiva.



2. Aquellos criterios de que aceptar el edificio convierte a la Conaie en cómplice de la disolución de la Unasur resultan ridículos. La Conaie saluda la creación de este organismo de integración, pero también criticó que la propuesta de integración sudamericana quede solo como una instancia entre estados y deje de lado todo mecanismo para una integración de los pueblos.

Ya son alrededor de dos años en que Ernesto Samper, el último secretario general de la Unasur abandonó el edificio y desde entonces no se ha podido elegir su sucesor. Esta situación tienen que ver mucho con las actuales posiciones de los nuevos gobiernos de derecha de la región, más la intención de EE.UU. de boquear toda iniciativa de unidad, pero también obedece a la falta de empeño efectivo para su consolidación y funcionamiento institucional por parte de los gobiernos progresistas que no lo hicieron cuando tuvieron las condiciones óptimas para hacerlo. Actualmente el edificio está en la práctica abandonado.

3. Lo que realmente debe preocuparnos son los niveles de conflictividad y violencia política, y seguramente social, que están demostrando imponer los sectores de poder. Pese al espejismo creado con las alianzas anticorreístas, ellos tienen muy claro que su objetivo es implantar el neoliberalismo en una nueva fase y para ello la sociedad organizada les estorba. Quienes creyeron, y siguen creyendo, que el anticorreísmo es un paréntesis de distensión del conflicto político entre el sector popular y los empresarios, no hacen más que construir una fantasía, un completo autoengaño.

4. La violencia con que protestan quienes consideran que la entrega del edificio “es una pésima idea”, o que es un “ejercicio del poder tan clientelar, demagógico y oportunista,” que es un “un gasto excesivo”^[1] para el Estado, debería servir para releer la situación y dimensionar el nivel de conflictividad existente y que puede llegar a ser, quizá así tomen conciencia de la necesidad de cambiar la estrategia política tanto frente al gobierno como, y sobretodo, ante los políticos representantes de los grupos de poder. Esto debería ser urgente, pensando incluso en el proceso electoral que se avecina. De seguir así, no será de extrañarse que los resultados electorales favorezcan ampliamente a la vieja derecha, a los correístas y, en alguna medida, también al partido de gobierno y a lo que se agrupe en derredor de ellos.

5. La posición que han adoptado los sectores de la vieja derecha, incluido los medios de comunicaciones afines, y los correístas, si bien comparten iguales criterios, pero como dice Silvio Rodríguez en una de sus canciones: “*no es lo mismo pero es igual*”. Son iguales en tanto ambos sectores quieren a las organizaciones sociales débiles y fuera del Estado; además de compartir parecidos prejuicios y desconocimientos, son diferentes, y esto es lo fundamental, en tanto que la vieja derecha ataca a los sectores populares organizados porque son o pueden ser un obstáculo para la ampliación del libre mercado, la libre acumulación y un Estado reducido y funcionalizado, en cambio los correístas ven en las organizaciones un límite y amenaza a su dogmático entendimiento del Estado como único ámbito de lo político y de lo público. Por lo tanto, la estrategia frente a ellos no debe ser la misma.

Entonces, más que pensar en qué tan racistas y eurocéntricos son la derecha, los correístas y otros más deberíamos estar debatiendo las implicaciones políticas que contienen, no solo en lo que a las propuestas se refiere, sino también a la estrategia política a definir. Para esto es también necesario una real conciencia de la situación



política organizativa interna del campo popular en miras de procurar una reconducción general.

En esta misma dirección debemos evaluar y redimensionar los diálogos Conaie-Gobierno. Estos no deben centrarse solamente en los elementos operativos de los resultados inmediatos, sino revisar si con ellos se está permitiendo un reposicionamiento de la organización tanto al interno de las comunas, pueblos y nacionalidades como en el conjunto la sociedad ecuatoriana. Quizá la problemática que mayor atención debe demandarnos es el espacio vacío dejando en la política nacional. Los diálogos nos han reducido a discutir temas específicos. El desafío es cómo mantener esa dialéctica de sostener temas específicos y nacionales al mismo tiempo, como una estrategia global; esa es la razón de ser de al Conaie, porque los problemas que enfrentan los pueblos indígenas provienen “fundamentalmente (de) un problema económico-político estructural y por lo mismo (de) un problema nacional”^[2].

Dado el nivel acelerado y conflictivo de la coyuntura política que estamos viviendo y de la precaria y ambigua situación y actitud de las organizaciones sociales, incluido el movimiento indígena, se hace urgente abrir espacios de debate sobre el rumbo que se está llevando y, sobre todo, respecto a las posibilidades que tenemos a futuro.

** Ex dirigente de la Conaie.*

[2] Artículo de Martin Pallares: <https://bit.ly/2v2xAeX>

[3] Proyecto Político de la Conaie 1994.



ENGABAO:

ENTRE EL MAR Y ÁLVARO NOBOA

Gerard Coffey

No hay mucha agua por aquí, la península de Santa Elena de la costa ecuatoriana se caracteriza por estar seca incluso en la “temporada de lluvias” y la comunidad de Engabao, ubicada en el cantón Playas, de la provincia de Guayas, no es ninguna excepción.

Matorral supongo que se llamaría, aunque no siempre ha sido así, según algunos de los residentes más antiguos, había bosque, bosque seco como se llama aquí, pero la gente del lugar lo taló para convertirlo en carbón ‘Leña para el Carbón’, como dice la canción. Así es como se ganaban la vida y cuando se acababa la madera recurrían a la pesca. Ahora no crece nada aquí aparte de unos pocos arbustos bajos. En el cerro es diferente, un hombre me dice, aún hay bosque allí y vamos a mantenerlo tal como está. Ahora sabemos mejor.

En el pasado, la falta de agua mantuvo a muchas personas alejadas del lugar, pero ya no. Más arriba en la península, hacia el pueblo turístico de Salinas, el riego llegó en los años noventa y con él vino gente de la ciudad de Guayaquil que imaginó que se podía hacer el negocio del siglo. La tierra barata o incluso la tierra robada podrían ser productiva con agua de riego, agua que la gente local y los comuneros ni siquiera podían permitirse y que en consecuencia podían ser “persuadidos”, de una manera u otra, para entregar sus tierras. El hecho de que la tierra de la comuna fuera exactamente eso, colectiva, y por eso no podría ser subdividida o vendida, no era un impedimento en un área donde no había ni Dios ni ley. Lo único que importaba era que la tierra era valiosa: eso era todo.

Engabao

Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, es oriundo de Guayaquil y estaba interesado en la tierra de la península. Su mirada cayó sobre la comunidad de Engabao, pero Noboa no es ningún agricultor, el agua que le atrae es salada más que dulce, un agua apta para navegar, surfear, nadar o como los billetes, simplemente contemplar. Y lo que tiene Engabao es precisamente este clase de océano y, lo que es más importante, tierra frente a este; tierra que los turistas, los ricos y los acomodados podrían apreciar. Un resort en un lugar como Engabao podría ser justo lo que Álvaro necesita y en la mente de Álvaro, lo quiere y lo consigue.

El problema es que la comunidad no lo ha visto del mismo modo. A pesar de la falta de riego y las oportunidades para cultivar, la gente local nunca estuvo de humor para ser intimidado, sobre todo por Álvaro Noboa, a quien muchos ecuatorianos consideran una



prueba viviente de que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso un título de abogado en Harvard.

El resultado ha sido una prolongada lucha, en la que Álvaro ha presentado documentos, donde según él, se comprueba que tierras de la comunidad le pertenecen y que las tierras que los comuneros dicen que son suyas son realmente sus dos haciendas: Merceditos 1 y 2. Frente a esto, la comunidad ha respondido pidiendo, y no siempre con cortesía, que Álvaro se vaya. Pero el ex candidato presidencial es persistente y no se ha ido. Más bien ha respondido con litigios, tratando de comprar a los líderes de la comunidad y levantando vallas. La población local se ha resistido, demoliéndolas y contratando a abogados.

En la ronda más reciente de la pelea, hombres contratados por Noboa, algunos armados, ocuparon la tierra. Soltaba ganado y actuaba de una forma agresiva que no agradó para nada a los lugareños. Marciano Roca, cuya familia cuida algunas casas frente al mar que la comunidad ha construido, dice que los hombres irrumpieron en uno de los edificios, destrozaron y robaron accesorios”. No fueron simplemente ladrones – dice Roca – esa gente fue enviada aquí por Noboa para hacernos la vida miserable. Fue nada más que otro intento de doblegarnos y obligarnos a entregarle nuestros terrenos”. Pero, Marciano no es un echado y como su nombre indica – es muy consciente de la alusión – es un luchador. “Noboa sube a la televisión para decir que somos ladrones, que somos narcotraficantes y demás, tratando de convencer que somos nosotros los que estamos tratando de robar su tierra, pero no es cierto, aquí somos pescadores, gente decente. La tierra es nuestra y no la vamos a perder”.

Para ser justo, Noboa no ha sido el único en codiciar la tierra de su vecino. Fabricio, el “hermano mayor” del ex presidente Rafael Correa también reclamó tierras aquí^[i], incluso construyó una casa pequeña y generalmente molestaba hasta que la comunidad lo echó hace cuatro años. Más tarde, su casa fue demolida por orden judicial y en noviembre de 2016 se reconoció los derechos de la comuna. Desde ese entonces, no se sabe de Correa, pero en Engabao nadie se ha olvidado de él, ni de ninguno de los otros que han tratado de reclamar tierras dentro de la comuna.

A la lucha

El resentimiento ha sido profundo, pero en mayo de este año, la situación se desbordó y desembocó en una batalla campal entre la gente de Noboa, ‘los invasores’ como los llaman los comuneros, y los habitantes de la comunidad. Los lugareños quemaron unos contenedores vacíos que los ‘invasores’ habían pintado de forma llamativa con la leyenda ‘Propiedad Privada’ y ubicado estratégicamente a lado de la única carretera que lleva al pueblo.

La policía estaba entre las dos bandas, lanzando gases lacrimógenos para mantenerlas separadas, lo que desde el punto de vista local no parecía exactamente justo, dado que un reciente veredicto de la Corte Constitucional había respaldado el derecho de la Comuna sobre sus tierras^[ii] y las decisiones de la Corte son el fin del camino legal. No hay derecho de apelación.

En una reunión comunitaria realizada a inicio de junio, las “autoridades” se sientan a la sombra de unas grandes carpas blancas, mientras que a la ‘gente’ le toca buscar



cualquier nicho para protegerse de un sol abrazador. La general Tania Varela, de la Policía Nacional de Guayaquil, llama a la calma y enfatiza que su trabajo es mantener la paz y hacer lo que exige la ley. “Ningún acto ilegal puede justificarse, precisa, sin importar de qué lado provenga”.

Varela hace el gesto de estar afuera, al pleno sol sin sombrero, mientras se dirige a unas 200 personas. Su estilo es discreto, complaciente, algo que no se refleja en las caras de los otros miembros de la policía; hombres que están sentados a la sombra. Esta vez, la Policía sí ha tomado el lado de la comunidad, expulsando a los ‘invasores’ de Noboa y asegurándose de que todos entiendan que no regresarán.

Hay decepción en multitud que asiste a la reunión, pues no se asoma el gobernador provincial, José Francisco Cevallos, pero el abogado de la comunidad, con camisa blanca, cabello peinado hacia atrás y soplando nubes de vapor de su cigarrillo electrónico, sí está presente. Sale al sol para tomar el micrófono y recibe una bienvenida bastante entusiasta. Agita la reunión con un poco de retórica de victoria, pero también pide calma a los comuneros, que en efecto están relativamente tranquilos, por Engabao. Salvo el presidente de la Comuna, Pedro Tomalá, quien más tarde me dice que las coordenadas de las supuestas haciendas de Noboa las colocan en realidad en los alrededores del cercano pueblo de Chaduy, pocos muestran interés en hablar.

Hay algunas quejas sobre otros asuntos concernientes a la comuna, pero la reunión sigue hasta que Emilio Chong, uno de los principales líderes de la lucha contra Noboa, toma el micrófono. Él dice a los comuneros que la policía no ha sido exactamente tan neutral como afirma la general Varela. Señala que muchas denuncias han sido documentadas a lo largo de los años, pero hasta ahora la policía no ha tomado medidas. Sostiene que algunos abusos incluso han sido filmados. Para su crédito, Varela acepta públicamente el argumento y la reunión se rompe con promesas de que finalmente se logrará la reunión tan esperada con Cevallos. La gente parece confiar en él.

Por su parte, Chong no está tan seguro acerca de las ‘autoridades’, ya sea sobre el gobernador o la alcaldesa del cantón Playas, donde se encuentra Engabao, quien entregó permisos de construcción en tierras de la comuna. “Ella era miembro del partido político de Noboa”, explica Emilio, “antes de pasar al partido del ex presidente Rafael Correa”.

Él es particularmente escéptico sobre el papel de la policía. “Aquí trabajamos con las ideas de Martin Luther King sobre la no violencia, pero cuando la policía llega con su discurso de paz, lo que parece significar para ellos es que debemos callarnos y no reaccionar mientras estamos siendo golpeados. Cuando un rico intenta poner sus manos en nuestra tierra, está negociando, pero cuando nos resistimos somos terroristas”.

Chong es directo e irradia energía, ha sido nombrado varias veces por haber incitado a los comuneros y actualmente es objeto de una queja presentada ante el fiscal local. Tampoco es ajeno a las amenazas de muerte y ahora no le gusta revelar su paradero. Cuando pregunto, simplemente me dice: “Ando arriba y abajo de la península, hablando con personas de otras comunas, tratando de unir a la gente. Estamos conectados con todas las comunas”.

Los vientos del cambio



Mientras estamos sentados esperando la llegada de las ‘autoridades’ y el inicio de la reunión, converso con Alejandra Villalta, entre el repique de las campanas de la iglesia y el chirrido de las sirenas de tormenta que, me imagino, están destinadas a enfatizar la urgencia de la situación a los invitados oficiales que aún no llegan. Ella está inmersa en la batalla desde hace cinco años y me cuenta que a pesar del optimismo de haber ganado la batalla legal, la comunidad no bajará la guardia. “Ha sido una lucha titánica contra una injusticia total”, dice, “pero tengo fe en la gente de aquí y en la gente de afuera que nos está ayudando. Seguiremos luchando siempre y cuando sea necesario”.

Alejandra y su esposo eran residentes de Guayaquil; vinieron aquí hace unos diez años y finalmente se mudaron a la comuna de forma permanente hace dos años. Son relativamente nuevos en Engabao, cuyas casi 7.500 hectáreas se registraron como comuna desde 1982, en una época en que pocos pensaban en el turismo por aquí. Salinas era el lugar a visitar si eras de Guayaquil y tenías dinero. Engabao era poco más que un pequeño punto en un mapa polvoriento que no mostraba nada.

El pueblo ha crecido desde entonces y ahora tiene una población de alrededor de 5.000 personas, según los residentes locales. También cuenta con su propio puerto, Puerto Engabao que surgió del cambio en los hábitos de trabajo, algo puesto en manifiesto por la fila de a no menos un centenar de lanchas pesqueras alineadas en la playa cada día. En total hay unos 350 barcos, dicen los habitantes, y al contrario de lo que dicen Noboa y su gente, los pescadores – todos son hombres – no son traficantes y tampoco hay problema con los traficantes que les obligan a portar drogas, como es el caso de la costa ecuatoriana más hacia el norte. Sin embargo, agregan que sí existe un problema con la piratería.

Un pescador explica que ahora no salen tanto por la noche porque los piratas, quienes provienen principalmente de la gran isla de Puná, en el golfo de Guayaquil, les roban los motores y los dejan a la deriva. Es un problema real, enfatiza. Tiene razón. Según el diario *El Comercio*, 30 personas han sido asesinadas desde enero de este año en enfrentamientos con grupos armados en alta mar^[iii]. La península de Santa Elena es una de las áreas más afectadas.

En tierra firme las cosas están cambiando, una vez más, y aunque el cambio es leve está claro que hay más hostales que hace cuatro años cuando estuve aquí la última vez. Una es propiedad de un ex funcionario de la Comisión de Tránsito de Guayaquil que, según Miguel propietario de la Cabaña de Miguelito, es amigo de la comunidad y ha hecho mucho para ayudar con la batalla legal. Cuando le pregunto a Miguel sobre los términos para ocupar la tierra en la que se encuentra el hostel, no está seguro de qué son y si la falta de definición no es un problema en este momento, podría pasar a serlo si un día la disputa con Noboa finalmente se termina y estos terrenos ahora muy apetecidos están por fin sólidamente en manos de la comunidad.

Le pregunto al presidente de la comuna qué planes habría si, como parece, la lucha finalmente ha terminado. ¿La gente estará interesada en sacar provecho y construir su propio resort al puro estilo Noboa o el plan será desarrollar una forma de turismo ecológico más relajado? Está distraído y no responde; está más interesado en lo que dice el general Varela y en cómo la disputa finalmente se puede poner a descansar.



Villalta, por otro lado, ha venido pensado mucho en lo que a futuro podría traer para la gente de aquí. Ella teme que el asunto de quién puede construir y en qué condiciones podría convertirse en un problema para la comunidad; las cosas han sido bastante relajadas hasta ahora. “Si vamos a evitar problemas en el futuro, los términos y condiciones para usar la tierra van a tener que ser mucho más claras”. También menciona el debate respecto a qué clase de turismo serviría mejor los intereses de la comunidad. “No creo que queremos que gente venga aquí para construir hoteles y todo lo que hay para la gente local sean trabajos de bajo nivel. Tenemos que pensar en desarrollar negocios propios, no solo en trabajar para otros”.

Ella nota que la presión está en aumento y el ‘desarrollo’ ya ha llegado a varias partes de la Costa. “Hay el puerto de aguas profundas en Posorja y también ‘Karibao’, un extenso complejo turístico que se está construyendo, ambos a pocos kilómetros de distancia[vi]. La gente de Guayaquil también está notando que existe un pequeño boom por aquí, lo que podría convertirse en un problema. Lo que queremos para la comuna es algo diferente, más en línea con las necesidades de la naturaleza, algo que se trata de paz y simplicidad. No queremos centros comerciales ni grandes edificios”.

Paz y sencillez

Al salir del pueblo, el chofer del bus deja pasar a dos chancitos negros que están cruzando el camino al trote. El gesto me parece indicativo de lo que está en juego aquí y de lo que se podría perder si la batalla por el futuro de las tierras de la comuna toma un curso indeseado. Alexandra por un lado, es respetada y tiene la película clara. Sus ideas indudablemente tendrán fuerza, a pesar de la presión para un tipo estándar de ‘desarrollo’ que pueda existir, incluso entre las personas que viven aquí. La tentación de aprovechar será fuerte y algunos pueden sucumbir a la tentación del dinero fácil. Emilio Chong también está consciente de la bifurcación en el camino hacia el futuro, pero es claro al respecto. “Queremos algo más basado en la comunidad donde la gente común pueda beneficiarse”, dice con firmeza.

Sin duda el debate sobre las direcciones se intensificará en el futuro cercano. La gente está consciente de las opciones y ahora tal vez puede sentarse a pensar más seriamente en el rumbo de la comuna. Pero a pesar de las victorias legales, uno de los ojos colectivos de la comunidad aún sigue clavado en Álvaro Noboa y en lo que puede hacer a futuro.

Un residente sugiere que la ventaja que tiene la gente de Engabao es que Noboa, hijo de un magnate bananero y cinco veces candidato presidencial, es considerado simplón por muchos segmentos de la población ecuatoriana. El problema, sin embargo, no es la opinión general de Noboa, sino el hecho de que él tiene el dinero para contratar gente astuta para que haga su trabajo. Una de ellas, la abogada Sylka Sánchez, quien también era miembro del partido político de Noboa, declaró que si bien la decisión de la Corte Constitucional reconoció los derechos de la comuna sobre sus tierras, también dejó la puerta abierta para la resolución de disputas a través de lo civil[v]. Es una declaración que lleva una clara advertencia para la gente de la comuna. Corte Constitucional o no, Álvaro Noboa no se va a ninguna parte sin pelear.

[i] Correa dijo ser dueño de 336 Ha incluyendo Puerto Engabao <https://bit.ly/2NITfkb>



[ii] En septiembre del 2017, si bien no aceptó un recurso de la comuna respecto a las acciones de Noboa, en el proceso la Corte sí confirmó los derechos de la comuna sobre sus tierras inicialmente sostenido por una decisión judicial del noviembre 2016 de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte de Justicia de Guayas. <https://bit.ly/2zpiapK>

[iii] “En este año la Dirección of Espacios Acuáticos (DIRNEA) ha registrado 112 robos de lanchas y motores, 12 desaparecidos y 30 muertos La delincuencia en el mar deja 30 muertos” *El Comercio* 25 de junio 2018. P 8.

[iv] Karibao es un sitio de 50 hectáreas que está siendo desarrollado por la hermana de Álvaro Noboa, Isabel, quien tiene fuertes lazos con el gobierno actual, y que en un momento fue considerada una posible candidata a la vicepresidencia de Lenin Moreno. El proyecto tendrá 30 edificios de alta, mediana y baja densidad y representa una inversión de US \$ 300 millones. <https://bit.ly/2KKyM0s>

[v] Según el diario *El Telégrafo*, Sánchez opina que si bien la Corte Constitucional inadmitió un recurso que presentaron los comuneros en septiembre del 2017, al mismo tiempo reconoció sus derechos sobre las tierras de la comuna. Sin embargo dijo la bogada, el fallo “da vía libre para que los conflictos sean resueltos por las autoridades jurisdiccionales competentes, es decir los jueces de lo Civil”. <https://bit.ly/2zpiapK>



La heurística de la crisis económica en el neoliberalismo

Pablo Dávalos

Rebelión

El concepto de crisis económica ha suscitado un amplio y profundo debate en la economía. Se reconoce a Marx y Keynes como los principales teóricos de la crisis del sistema capitalista, mientras que se le critica al pensamiento económico dominante su incapacidad de reconocer a la crisis económica como inherente al sistema. Sin embargo, la emergencia, consolidación y radicalización del neoliberalismo a escala mundial, obligan a repensar la noción de crisis económica desde otra perspectiva.

Se trata de una discusión que se aleja de las coordenadas de la economía para inscribirse directamente en aquellas de la política. En efecto, el neoliberalismo ha provocado cambios tan importantes en el capitalismo mundial, que es necesaria una nueva visión sobre la crisis económica que salga del ámbito académico para formar parte del debate político.

Si en primera instancia se pensaba en la crisis económica como una anomalía o disfuncionalidad del sistema capitalista, las derivas del shock económico sitúan a la crisis económica en otro nivel: aquel que desencadena las condiciones de posibilidad para la imposición radical de las transformaciones neoliberales. En efecto, habría sido muy difícil que las políticas de ajuste y estabilización macroeconómica, o su correlato en las políticas de austeridad fiscal, que se impusieron y se imponen a rajatabla en varios países de América Latina, África y Europa, tengan el consenso social necesario sin un requisito previo de crisis económica.

Empero, es necesaria una reflexión que sitúe a la noción de crisis económica no tanto como el expediente estratégico que posibilita la transición de un modelo de economía hacia otro, sino como parte de una gran transformación global en la cual la crisis pasa de convertirse de evento desencadenante a fenómeno estructural.

Esa gran transformación afecta los contenidos de la política, las formas de la democracia, las dinámicas de los Estados modernos y los patrones que definen la acumulación a escala mundial. Todos ellos, de una u otra manera, convergen hacia a la crisis como el núcleo central desde el cual se genera la fuerza gravitacional necesaria para que el mundo gire alrededor del neoliberalismo y sus transformaciones.

Para desarticular al Estado de Bienestar construido luego de la última posguerra y, al mismo tiempo, permitir la consolidación del neoliberalismo, es necesario que la sociedad legitime esa desarticulación y que, además, se cree un consenso alrededor de la noción de “mercado” como el eje de articulación de las relaciones sociales y los marcos institucionales, en ese sentido, la noción de “crisis” es fundamental para conseguirlo, porque permite la convergencia de varias dimensiones de tipo político, ideológico, económico e institucional hacia el neoliberalismo.



De esta forma, y a contrapunto de la creencia del sentido común que piensa que la crisis económica representa los equívocos del sistema y los síntomas de su decadencia, en realidad, el sistema capitalista, y en particular el neoliberalismo, ahora necesitan de la crisis para garantizar su propia existencia.

Si no existe la crisis es necesario crearla, porque gracias a ella se puede abrir el espacio político necesario para que puedan operar en el interior de la sociedad los mecanismos de mercado como reguladores sociales y políticos.

No obstante, hay que precisar que cuando se menciona al “mercado” desde el discurso neoliberal, no se hace referencia solamente a los procesos de compra-venta, o definición de precios, o de equilibrios entre oferta y demanda, sino que se pretende ir más allá: el *mercado*, en la visión neoliberal, es una categoría política más que económica. El mercado se convierte en el espacio desde el cual se transita de la regulación económica de la sociedad hacia su regulación política y, por tanto, de sus relaciones de poder.

Desde una estricta visión económica, el mercado puede ser visto como el espacio que permite el encuentro entre la oferta y la demanda a través de la lógica de los precios, pero desde una visión política, el mercado es el espacio que regula al conjunto de la sociedad y define el marco y las formas de sus relaciones de poder.

Se trata de un cambio de perspectiva importante porque desde el discurso neoliberal, esto implica que todos los procesos y mecanismos que regulaban a la sociedad y que se definían desde la política y el Estado moderno, ahora deben articularse y definirse en función del mercado como el espacio desde el cual se estructuran las relaciones y luchas de poder.

Por ello, desde el enfoque neoliberal, la oposición Estado/mercado no es económica sino política. En efecto, no pueden oponerse fenómenos sociales que tienen estructuras y dinámicas diferentes, a condición que puedan ser inscritos dentro de la misma lógica.

Al oponer Estado y mercado, el neoliberalismo utiliza un concepto con una fuerte significación ética y una deriva axiomática, como aquel de la *libertad individual*, para inscribir la noción de mercado en el interior de la esfera de la política y convertirlo, de esta manera, en un concepto político. Así, su apelación a la libertad individual es puramente estratégica, porque le permite desprender a la categoría de mercado de sus prosaicas referencias al interés individual y transformarlo en un deber-ser social.

Solo desde la esfera de la política, el mercado puede disputar sentidos de sociedad al Estado que, en cambio es, por definición, un concepto político. Si el mercado se convierte en un concepto político, la oposición entre dos conceptos políticos y aparentemente antitéticos (Estado y mercado), no es de irreductibilidad, es decir, no implica o el uno o el otro; sino de coexistencia en disputa, en el que el uno subsiste a condición que el otro se pliegue al interior de sus propios requerimientos.

En otros términos, aquello que está en disputa en el neoliberalismo es la legítima capacidad política que tiene el Estado de regular a toda la sociedad. El mercado ahora reclama para sí esa capacidad política de regulación social, pero necesita mantener la violencia del Estado para ejercerla. El neoliberalismo no prescinde del Estado sino que lo subsume.



En efecto, en el neoliberalismo no hay oposición real entre el mercado y Estado, sino el pliegue de la capacidad política de regulación social del Estado, dentro de los mecanismos del mercado, con la vigencia plena de la violencia moderna del Estado. Así, quien controla al mercado, controla la política y, por tanto, la sociedad. Quien sale de las coordenadas del mercado puede ser reinscrito a su interior gracias, precisamente, a la violencia del Estado.

Sin embargo, para realizar esta tarea es necesario que la sociedad y los diferentes sectores sociales que siempre han visto y han situado dentro del Estado la resolución de sus conflictos y la defensa de sus intereses, ahora resignen esa praxis y reconozcan la legitimidad política del mercado como el espacio en el cual se resuelvan esos conflictos políticos y esas luchas sociales.

Un proceso de esas características no puede ser asumido sin violencia social, porque muchos sectores sociales consideran que, a pesar de todo lo que pueda decirse sobre el Estado, es la esfera política la que de alguna manera les ha permitido defender mejor sus intereses, y porque, en conformidad con el discurso del liberalismo clásico, el Estado representaba el “interés general”.

En consecuencia, para que esos sectores sociales se alienen de sus tradicionales mecanismos y procesos de regulación social, es necesario destruir esos mecanismos, es necesario alienar a la sociedad de la política, es necesario crear una cesura radical entre la sociedad y su propio Estado. De la misma manera que el obrero no se reconoce en la mercancía que él mismo ha creado, así la sociedad, en el discurso neoliberal, debe alienarse del Estado que es su propia creación. La sociedad debe mirar al Estado como al Leviatán, como al Ogro Filantrópico, como un espejo esquivo que se niega a devolver su reflejo.

Para producir esa cesura y esa alienación es necesario crear un acontecimiento de ruptura de la sociedad consigo mismo. Es ahí donde cabe la crisis económica y la violencia de su rol heurístico.

En ese sentido, las crisis económicas siempre son dispositivos políticos, aunque aparezcan como fenómenos económicos. En efecto, la crisis económica permite la desarticulación de los procesos políticos que definían y estructuraban la regulación social y que estaban contenidos en el Estado.

En un escenario de crisis económica, la sociedad se siente amenazada por algo que la rebasa y ante lo cual no tiene respuestas ni capacidad de maniobra. La crisis económica, aparece como un hecho creado desde fuera de la sociedad y por fuerzas de mercado que la sociedad no puede controlar y, ni siquiera, reconocer. Esas fuerzas de mercado que desencadenan la crisis se convierten en un Godzilla que amenaza a todos y cada uno con su fuerza destructiva, y ante el cual casi no existen soluciones, sino la espera paciente que se aleje y remita. En ese sentido, las crisis económicas recuerdan mucho a las catástrofes naturales, y no es gratuito el hecho que el neoliberalismo haya utilizado a las catástrofes naturales como parte de su heurística de la crisis económica.

A pesar de que la economía forma parte de la sociedad y los seres humanos la crean y la recrean cotidianamente, durante las crisis económicas, la economía se convierte en una potencia extraña, amenazante y, lo más paradójico de todo, en un evento in-humano.



Ante circunstancias tan dramáticas y desesperadas, la sociedad siente que los tradicionales mecanismos por los cuales se regulaba la producción, la distribución de la riqueza, y las relaciones de poder, están desfasados y no pueden, al menos en esos momentos, devolverle a la sociedad la confianza en sus propias capacidades. Si la crisis aparece como el designio de un dios numinoso y producto de la Ira Dei, como fuerzas desencadenadas de un mercado al que nadie puede controlar, entonces para restablecer la calma es necesario recapitular y ceder a esos numinosos designios.

Mientras más profunda, más grave y más radical sea la crisis, más sacrificios debe realizar la sociedad para conjurarla. En circunstancias normales, la sociedad no va a permitir que muchos marcos institucionales que le sirvieron para defenderse a sí misma, por ejemplo las ayudas sociales a los más pobres, o los planes de protección a los jubilados, o a los niños, o a las mujeres en situación de violencia, o los derechos de los trabajadores, se desarticulen. Pero cuando la crisis económica se ha desencadenado, es la existencia misma de la sociedad la que está en juego y ésta apela a negociar aquello que antes era innegociable. El rol heurístico de la crisis es potente porque las causas que la desencadenan nunca coinciden con aquellas que la remiten.

El neoliberalismo aprendió bastante bien ese rol heurístico que tienen las crisis económicas. El neoliberalismo comprendió que de la misma forma que Roosevelt utilizó la crisis económica de 1929 para negociar el New Deal y construir el Estado de Bienestar, ellos podían hacerlo pero en sentido contrario. La historia les enseñaría que no solo que se pueden aprovechar políticamente las crisis, sino que también pueden ser provocadas en beneficio propio.

Existe un catálogo extenso de crisis económicas desencadenadas y provocadas desde que se impusieron las ideas neoliberales como ideas regulatorias del capitalismo. En ese catálogo, el neoliberalismo tiene en sus activos el apoyo a regímenes fascistas y genocidas como las dictaduras de los años setenta del Cono Sur de América Latina, o el régimen de Suharto en Indonesia; o las crisis económicas de Grecia, EEUU, entre otras, que se suscitaron en la primera década del siglo XXI. Para el neoliberalismo, las víctimas de sus políticas podían ser comprendidas como “daños colaterales”.

El neoliberalismo necesita de la crisis económica. Ellas se convierten en el umbral necesario para su tránsito de la economía hacia la política y hacia el control de la sociedad. Sin la crisis económica, las sociedades tienen posibilidades de defenderse y el neoliberalismo tendría pocas oportunidades de aplicarse, por ello el neoliberalismo se constituye en la teoría y en la praxis de la crisis permanente.

Todo su discurso está inscrito desde las coordenadas de la crisis: austeridad fiscal, ajuste económico, políticas de estabilización, desregulación, privatización, apertura, competitividad, superávit fiscal, en fin, son conceptos cuya articulación epistemológica y pertinencia normativa solo caben y se explican desde la noción de crisis. Fuera de este marco teórico que tiene como referencia a la crisis, son conceptos y nociones con pocas posibilidades teóricas y prácticas.

La crisis económica como heurística de la gran transformación neoliberal implica una nueva conceptualización, porque ahora la crisis económica no expresa una disfuncionalidad del sistema sino una necesidad política. Cuando se requiere disciplinar



a la sociedad y encajarla en el interior de las coordenadas neoliberales, el expediente de la crisis económica es infalible.

Gracias a la crisis económica, se puede flexibilizar el trabajo sin la resistencia activa de los sindicatos. Gracias a la crisis económica se puede radicalizar la austeridad, sin movilización social que la cuestione. Gracias a la crisis económica se puede eliminar cualquier traba jurídica, social, política o institucional que obstaculice a las corporaciones transnacionales. Se puede también devaluar la moneda, recortar gasto fiscal para sectores sociales, eliminar subsidios sociales, restringir el acceso al empleo público, dismantelar el proteccionismo, en fin, todas las políticas que forman parte de la austeridad fiscal.

La gran transformación del capitalismo que está provocando el neoliberalismo tiene a la crisis económica como elemento central. Los teóricos del neoliberalismo, en el fondo son teóricos de la crisis permanente. Así, referirnos a la crisis del sistema implica entrar de lleno en los marcos teóricos de la episteme neoliberal y legitimar involuntariamente sus prescripciones.

Quizá por ello, sea necesario otro marco teórico para definir lo que es la crisis. Quizá en su momento aquellas explicaciones que daban cuenta de la sobreproducción del sistema y de la insuficiencia de la demanda efectiva, aún sean pertinentes para comprender la dinámica interna del capitalismo, pero al parecer son insuficientes para entender la economía política del neoliberalismo y las transformaciones históricas que provoca.

Desde una visión de economía política del neoliberalismo, quizá sea necesario esbozar una nueva hipótesis, cuyos alcances y repercusiones teóricas y prácticas tendrían que ser desarrolladas y que podrían ayudarnos a comprender y situar de manera más coherente las dinámicas internas del capitalismo tardío; la hipótesis que las crisis económicas, al menos desde el horizonte conceptual y analítico en el que las habíamos situado y comprendido, en realidad, no existen.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una [licencia de Creative Commons](#), respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

